

Algunos desafíos en un continente en crisis



Juan Trímboli Vercesi es presidente de la Fundación Ciudadana para un Consumo Responsable desde 2017 y dirige el blog *Consumo y Ciudadanía*. Fue director regional de Consumers International (CI) para América Latina y el Caribe hasta agosto del

2016. En sus inicios como militante social fue dirigente del movimiento cooperativista uruguayo. Posteriormente integró la dirección ejecutiva del Frente Izquierda de Liberación de Uruguay, sector político que fue posteriormente fundador del Frente Amplio. A fines de 1987 fue contratado por la Organización Internacional de Consumidores (IOCU), actualmente CI, donde ha ostentado varios cargos de responsabilidad tanto en Uruguay como en Santiago de Chile, lugar desde donde impulsó el desarrollo de organizaciones de consumidores.

En América Latina y El Caribe se viven horas turbulentas.

La población se enfrenta a una crisis de magnitud y las personas consumidoras, especialmente aquellas de menores ingresos, están sintiendo con fuerza el impacto de esta situación.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que la economía de la región tendrá que enfrentar una difícil coyuntura durante, al menos, lo que resta del 2022 y el primer semestre del 2023. Los niveles de pobreza y extrema pobreza se elevarán considerablemente, superando lo estimado durante el 2021.

De acuerdo a estudios de la Cepal, en su reciente informe *Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: cómo enfrentar esta nueva crisis*, la situación económica y social que atraviesa Latinoamérica es consecuencia, entre otros factores, de la fuerte desaceleración económica, el notable aumento de la inflación y la lenta recuperación de los mercados laborales que se vieron muy afectados debido a la pandemia.

Un panorama marcado por la incertidumbre

El continente logró sortear con relativo éxito la grave crisis financiera global del 2008, sin embargo, no ocurrió lo mismo con la crisis que se inició el 2011 como consecuencia de la brusca caída del precio de las materias primas. En esto influyó principalmente la desaceleración, en ese período, de la economía china. La segunda década del nuevo siglo se vio así marcada, en lo esencial, por una pronunciada desaceleración del ritmo de crecimiento regional.

Hoy es posible afirmar que esta tercera década del siglo está marcada por la incertidumbre, la cual tiene como telón de fondo una crisis económica y social de magnitud que afecta a toda la región y que pone a prueba a todas las sociedades y sus sistemas políticos.

El mencionado informe de la Cepal señala que los niveles de pobreza y pobreza extrema aumentarán en la región. América Latina y El Caribe seguirán estando entre las regiones con los índices de pobreza más altos del mundo.

Un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina CAF nos entrega datos que ilustran lo anterior:

- Más de un tercio de los latinoamericanos son pobres, lo cual representa al 33,7 de la población o 209 millones de personas.

La crisis sanitaria que permanece vigente produjo daños profundos a un tejido social extremadamente vulnerable. La crisis de salud se ha convertido en una crisis social generando el aumento significativo de la pobreza y la desigualdad.

- Simultáneamente, la cantidad de personas que han caído en la extrema pobreza se elevó de 81 a 86 millones de individuos. Se trata de niveles no vistos en casi 30 años.

La pobreza extrema está estrechamente ligada a la inseguridad y el hambre. El derecho a una alimentación adecuada es un derecho humano fundamental, pero podemos ver que actualmente es vulnerado para cientos de millones de personas, a las cuales también les está negado su derecho a viviendas adecuadas, a la salud, al agua, a la educación.

- La crisis económica y social hace más evidente las desigualdades de género. Las mujeres siguen siendo las más afectadas por el desempleo, la pobreza y la sobrecarga de cuidados no remunerados.

Desde el comienzo de la pandemia las mujeres han sido el soporte silencioso de la crisis. Las actuales brechas de género en lo laboral, ingresos y educación podrán costarle a la región el 14% de su PIB per cápita en las próximas tres décadas.

En este cuadro, dos elementos insoslayables son el empleo, marcado por una muy lenta recuperación, y una aguda presión inflacionaria, especialmente concentrada en alimentos y energía.

En materia de desempleo, las cifras proyectadas indican un 14%, aunque la Organización Internacional del Trabajo (OIT) anunció una desaceleración del ritmo de creación de empleo durante este año, lo cual podría impulsar un alza de la tasa de desocupación. Es de notar que diversos analistas señalan que la cifra de desempleo del 14% no es real y que esta podría ser superior a un 25% a nivel regional.

Impactos de la crisis

La crisis tiene un impacto social y político indudable. Con un signo progresista esto se materializó en las victorias electorales de Gabriel Boric en Chile, de Gustavo Petro en Colombia o en la reciente de Lula da Silva en Brasil.

Sin embargo, esto no oculta la existencia de un escenario muy complejo dadas las difíciles condiciones de legitimidad existentes en la mayoría de los países de la región. La institucionalidad aparece debilitada por una creciente desconfianza de la población en las élites políticas y empresariales.

Los numerosos actos de corrupción nacidos del contubernio entre los negocios y la política son



un factor potente en el debilitamiento de la democracia. Una de sus expresiones es, salvo pocas excepciones, la elevada desaprobación ciudadana respecto de los gobernantes.

A todo lo anterior hay que agregar el incremento del delito organizado y el control que carteles y mafias hacen de buena parte del territorio de nuestros países, especialmente de las zonas donde la pobreza predomina.

Es cierto que en América Latina no hay guerras convencionales, pero también es verdad que la región es hoy una de las más violentas del planeta. En los primeros 19 años de este siglo, ocurrieron 2,4 millones de homicidios en la región. Esta cifra muestra que con sólo el 8% de la población mundial, a América Latina le correspondió el 50% de los homicidios a nivel mundial de acuerdo con datos recabados por Naciones Unidas en más de 202 países.

Si bien la crisis económica, inflación, violencia y crisis de confianzas parecen ser un signo de nuestro tiempo en la región y en buena parte del mundo, existen también signos esperanzadores.

Son muchos, desde la sociedad civil organizada, el mundo académico y también en el ámbito político que se sienten convocados para desplazar aquello que se nos ha mostrado hasta ahora como lo único posible y "*sensato*", pero que en estos últimos años ha develado de manera dramática la debilidad estructural de nuestras sociedades latinoamericanas, sus profundas desigualdades y un modelo de crecimiento en el que el peso desmedido de la producción de materias primas impide un desarrollo más autónomo, sustentable y socialmente integrador.

Una expresión contundente de esto han sido los masivos movimientos populares de protesta que han sacudido recientemente el continente. Con

sus especificidades nacionales, el núcleo de estas movilizaciones denunciaba y rechazaban fenómenos recurrentes como el alto costo de la vida y la disminución del poder adquisitivo, los abusos, las desigualdades sociales, la corrupción, las bajas pensiones, el alto costo y en muchos casos imposibilidad de acceder a servicios públicos básicos.

Mirando el futuro

La región enfrenta el desafío de aliviar la situación inmediata de millones de personas. Las urgencias del momento se enlazan con crecientes demandas que permitan generar sistemas amplios y eficientes en materia de salud, soberanía alimentaria, educación, vivienda, previsión social, sustentabilidad y también seguridad ciudadana.

Si reconocemos la existencia de una crisis multidimensional, las organizaciones de la sociedad civil tenemos que plantearnos la posibilidad de avanzar hacia nuevos modos de entender y vivir las relaciones sociales, apuntando a una comunitarización de la vida en perspectiva de una civilización reflexiva, colaborativa y de pleno disfrute para todas y todos de aquellos bienes comunes naturales y culturales, que hoy continúan siendo apropiados por grupos minoritarios poderosos e insensibles ante las heridas del mundo de las personas y del medio ambiente.

Vivimos en sociedades complejas que exigen aprender a dialogar con aquellos que puedan pensar distinto a nosotros, pero que ven en la democracia y la justicia social el único camino posible

En momentos de emergencia las comunidades, las organizaciones sociales, sindicales, de consumidores y consumidoras, feministas y los movimientos ciudadanos en general han evidenciado su capacidad para movilizarse, construir plataformas y redes que fortalecen los vínculos sociales de base, de generación de ideas e iniciativas que muestran nuevos modos de pensar y actuar en los espacios públicos locales, nacionales y globales.

Una vez más, como ha sido a lo largo de su historia, las organizaciones de consumidores estamos obligadas a repensar permanentemente nuestras prioridades. Las que tenemos que insertar en el camino hacia una nueva economía, solidaria y compleja y siempre orientada a un bienestar con igualdad y sostenibilidad. Una economía que estimule, entre otros factores, la producción de alimentos saludables, el desarrollo de energías renovables, de bienes de larga duración y bajo

consumo. Y que al mismo tiempo se vayan eliminando los alimentos industriales no saludables, la producción con obsolescencia programada, las estrategias que conllevan a un sobreendeudamiento que agobia hogares, los servicios básicos con rentabilidad monopólica.

La experiencia acumulada, en tiempos de logros y también fuertes retrocesos, nos muestra que para avanzar en la superación de los problemas que enfrentamos como personas consumidoras, y que tienen su causa de fondo en asuntos estructurales presentes en los modelos de desarrollo predominantes, tenemos que trabajar en conjunto con todas aquellas organizaciones e instituciones que buscan abrir nuevos horizontes para la sociedad y la naturaleza.

Vivimos y actuamos en sociedades complejas donde confluyen una diversidad de creencias, ideas, maneras de pensar, modos de vida e intereses, incluyendo los materiales. Es un escenario que nos exige aprender a dialogar, también con aquellos que en algunos aspectos puedan pensar distinto a nosotros, pero que ven en la democracia y la justicia social el único camino posible para avanzar hacia una mejor sociedad.

Como Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable hemos propiciado, a nivel regional, una agenda que incluye algunos temas que buscan promover y facilitar conversaciones e iniciati-



vas comunes, con el objetivo de incidir en la vida cotidiana y social de nuestros países.

En primer lugar, tenemos que lograr que se garanticen derechos fundamentales para la vida desde un Estado social, solidario y democrático que asegure sistemas de protección social, empleos decentes, soberanía alimentaria, acceso universal a las tecnologías de la comunicación y otros bienes culturales claves para el desarrollo humano en la actualidad.

En segundo lugar, tenemos que concordar en temas estratégicos tales como asegurar la vida y la salud de las personas y el planeta; la democratización del conocimiento y el acceso a bienes fundamentales para preservar la vida humana y, en particular, en relación a las industrias farmacéuticas y a la economía global de los medicamentos; la renta universal como una herramienta para avanzar en condiciones de bienestar extendido; la transición a un nuevo trato con la naturaleza; la igualdad de género; políticas de justicia energética e hídrica; la democratización del conocimiento y la educación de la personas consumidoras como ciudadanos y ciudadanas capaces de comprender las dinámicas del mercado, defender su derechos y asumir comportamientos ambiental y socialmente responsables.

Especial atención nos merece en este punto la educación comunitaria y la formación de liderazgos que puedan orientar proyectos alternativos de consumo vinculados al cuidado del medio ambiente, de los ecosistemas, al desarrollo de economías circulares y a la seguridad y soberanía alimentaria.

Todos los mencionados son temas esenciales para nuestros países. Resultan fundamentales para una vida digna y para una buena convivencia en democracia.